

Perú

Informe sobre la Práctica de los Derechos Humanos en el Perú, 2005 Emitido por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo 8 de marzo del 2006

El Perú es una república multipartidaria con una población de aproximadamente 28 millones de habitantes. En el año 2001 Alejandro Toledo del partido Perú Posible fue elegido presidente en elecciones que –en general- fueron libres y equitativas. Las autoridades civiles generalmente mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad.

Aunque el gobierno por lo general respetó los derechos humanos de sus ciudadanos, existieron graves problemas en varias áreas. Los siguientes problemas en el área de los derechos humanos fueron reportados:

- golpizas, abuso y tortura de los detenidos e internos por parte de miembros de la Policía y de las fuerzas de seguridad de las prisiones
- hostigamiento de los testigos por parte de las fuerzas de seguridad
- impunidad entre los miembros de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad
- condiciones carcelarias deficientes
- prolongadas detenciones anteriores al juicio y demoras excesivas en los juicios
- presiones ejercidas sobre los medios de prensa por parte de las autoridades locales y otros grupos, incluyendo los productores de coca y un conocido narcotraficante
- violencia y discriminación contra las mujeres
- violencia contra los niños, incluyendo el abuso sexual
- trata de personas
- discriminación contra los indígenas y otras minorías
- dificultades significativas entre las personas con discapacidades
- restricciones sobre el derecho a la negociación colectiva
- trabajo infantil en el sector informal de la economía

La organización terrorista Sendero Luminoso fue responsable de asesinatos y otros abusos.

RESPECTO POR LOS DERECHOS HUMANOS

Sección 1 Respeto por la Integridad de la Persona, incluyendo el verse libre de:

a. Privación Arbitraria o Ilegal de la Vida

El gobierno o sus agentes no cometieron ningún asesinato políticamente motivado, aunque hubo un informe sobre una asesinato ilegal por parte de la Policía en el 2004, el mismo que se hizo público durante el año. A diferencia de años anteriores, ningún recluta militar murió bajo circunstancias sospechosas durante el año, comparado con dos muertes de este tipo ocurridas en el 2004.

En el mes de enero, la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) aceptó encargarse del caso de Ricardo Huaranga Félix que fue supuestamente asesinado por tres oficiales de la Policía al momento de su arresto en noviembre del 2004. Familiares del occiso afirmaron que habían recibido amenazas de personas desconocidas instándolos a abandonar la causa seguida contra los miembros de la Policía. El 22 de noviembre, personas desconocidas secuestraron y golpearon a un testigo clave de este caso y lo abandonaron en una zona alejada de Lima. La COMISEDH interpuso una denuncia ante la fiscalía del Cono Norte de Lima. Para finales de año la causa continuaba en la Sala Penal Nacional y dos de los tres oficiales acusados permanecían en prisión.

En el mes de agosto, un juzgado determinó que tres miembros de las fuerzas de seguridad eran culpables del asesinato de José Reina Rincón ocurrido en el año 2002 y sentenció a cada uno de ellos a 25 años de cárcel.

No hubo nuevos avances en el proceso penal seguido contra cuatro oficiales de la Policía acusados de la tortura y el asesinato de Edgar López Sancarranco en el año 2003 mientras éste se encontraba bajo custodia.

En el mes de mayo, el fiscal en Cuzco pidió que se condenara a 16 años de cárcel y se les impusiera una multa de 15 mil dólares (51.600 soles) a siete oficiales de la Policía involucrados en la muerte de Julio Alcázar Dolmos en el 2003 mientras éste se encontraba bajo custodia.

En el mes de abril, la Cuarta Fiscalía Supraprovincial de Lima retiró los cargos (por falta de pruebas) contra los oficiales de la Policía involucrados en la muerte de Gerardo Adrián Otárola ocurrida en el año 2002 mientras se encontraba bajo custodia.

En el mes de abril, la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo de un juzgado de primera instancia en Chíncha por el que se sentenció a cuatro agentes del Sistema Nacional Penitenciario a cinco años en prisión por el asesinato del interno Esteban Miñán Castro, ocurrido en el año 2001.

Para finales de año, no hubo nuevos avances y no se esperaba ninguno en el caso del asesinato en el año 2003 de Edy Quilca Cruz y las heridas causadas a otras 30 personas cuando soldados dispararon contra ellas durante una protesta en Puno.

En el mes de febrero, las autoridades presentaron una denuncia por homicidio en el juzgado penal de Huanta contra dos oficiales de las Fuerzas Armadas en el caso de Peter Vásquez Chávez, un recluta militar de 23 años que fue hallado muerto en la Base Militar Cangari-Huanta en Ayacucho. Aunque las Fuerzas Armadas señalaron que Vásquez Chávez murió como resultado de un ataque perpetrado por Sendero Luminoso, personas de la localidad afirmaron que ese ataque nunca tuvo lugar. Para fines de año, la causa continuaba ventilándose.

En el mes de diciembre del 2004, el juzgado de Puquio en Ayacucho ordenó que se condujeran investigaciones en el caso del cabo del Ejército Edgar Ledesma López quien

fue encontrado muerto en su cuartel militar en octubre del 2004. Cuatro oficiales de las Fuerzas Armadas continuaban siendo investigados para finales de año.

No hubo nuevos avances y no se esperaba ningún avance nuevo en las muertes de los reclutas Leonel Sánchez Rivero y Freddy Campos Avendaño, ocurridas en el año 2003.

Las investigaciones sobre las muertes del recluta del Ejército, Cabo Magno Ariza Paitán y del Cabo John Lenon Olórtegui, continuaron.

Luego de un nuevo juicio celebrado en el mes de agosto, los fiscales decidieron no presentar cargos en el asesinato del recluta José Luis Poma Payano, ocurrido en el año 2000.

El gobierno continuó arrestando a miembros del grupo de aniquilamiento Colina. Desde el 2001 las autoridades han arrestado a 13 miembros de este grupo. Para finales de año, todos los juicios – incluyendo los casos de Barrios Altos y La Cantuta- se encontraban en la fase oral del proceso.

La causa relativa a las denuncias de asesinatos extrajudiciales cometidos durante el rescate de 74 rehenes en la residencia del Embajador del Japón en el año 1997, continuó avanzando a través del Poder Judicial. Para mediados de año, el ex Director del Servicio de Inteligencia, Vladimiro Montesinos, el ex Jefe de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza, el Coronel Roberto Huamán y el Coronel Jesús Zamudio permanecían bajo custodia y la Corte Suprema de Justicia continuaba deliberando sobre cuál de los juzgados anticorrupción debía ocuparse de esta causa.

En el mes de agosto, la fiscalía desistió de juzgar al ex Presidente Alan García y a miembros de su gabinete por el papel que jugaron en la masacre que tuvo lugar en la prisión El Frontón en el año 1986. La COMISEDH presentó un recurso de apelación a esta decisión y la Primera Corte Supraprovincial investigó posibles cargos contra las autoridades supuestamente responsables por la pérdida de vidas en El Frontón.

En agosto del 2004, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el proceso judicial por la masacre ocurrida en el año 1980, en el que soldados supuestamente torturaron y asesinaron a ocho campesinos en Chuschi, debía ser conducido en el fuero civil, en vista de que era un caso donde se habían violado derechos humanos. Para finales de año, la causa estaba siendo vista por la Corte Penal Nacional, y la fase oral del proceso debía iniciarse en mes de febrero del 2006.

El grupo terrorista Sendero Luminoso continuó asesinando a civiles, así como a miembros de las Fuerzas Armadas y oficiales de la Policía. Hubo 60 incidentes de terrorismo reportados durante el año; los incidentes más serios ocurrieron en Junín, Huánuco, San Martín y Ayacucho. Durante el año, miembros de Sendero Luminoso asesinaron a 17 miembros de la Policía, a 5 civiles y a un juez. Por ejemplo, en el mes de julio, miembros de Sendero Luminoso asesinaron a cuatro civiles, un policía y un juez, en dos incidentes separados en las Provincias de Satipo y Tocache.

b. Desapariciones

No hubo ningún informe sobre desapariciones ocurridas por razones políticas.

No hubo nuevos avances en el proceso seguido contra el Comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) Juan Carlos Mejía León y varios oficiales de la PNP acusados del secuestro de Ernesto Rafael Castillo Páez, un estudiante detenido por la PNP por sospechas de terrorismo en el año 1990, quien posteriormente desapareció.

No hubo nuevos avances en el juicio a 11 miembros de la Policía por la desaparición de Andy Williams Garcés en el año 2003.

En el mes de setiembre, se inicio la fase oral del proceso seguido contra cuatro miembros de las fuerzas de seguridad acusados de haber secuestrado y hecho desaparecer a Ernesto Rafael Castillo Páez en 1990.

Sendero Luminoso cometió secuestros. En noviembre un grupo fuertemente armado de miembros de Sendero Luminoso secuestró a diez empleados de un contratista extranjero en el área de desarrollo en el Departamento de Huánuco. Más tarde los secuestradores liberaron a los empleados pero amenazaron con asesinarlos si regresaban a esa zona.

c. Tortura y Otro Trato o Castigo Cruel, Inhumano o Degradante

Aunque la ley prohíbe tales prácticas, continuaron existiendo informes sobre la tortura de detenidos, el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y abuso de los reclutas militares. Las autoridades rara vez responsabilizaron de estos abusos a aquellos que supuestamente los cometieron.

La tortura con frecuencia ocurrió inmediatamente después del arresto, cuando los familiares de los detenidos estaban prohibidos de visitarlos mientras estos eran mantenidos incomunicados y en momentos en que sus abogados tenían un acceso limitado a ellos (ver la sección 1.d.).

En algunos casos la Policía y las fuerzas de seguridad amenazaron u hostilizaron a las víctimas, a sus parientes y a testigos de los hechos con el propósito de impedir que estos presentaran cargos por violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con la COMISEDH, algunas víctimas se rehusaron a entablar un proceso judicial contra sus abusadores por temor a que estos fuesen liberados sin que se les acusara de nada. La COMISEDH informó acerca de 14 casos de tortura agravada cometida por las fuerzas de seguridad entre los meses de enero y setiembre, comparado con 22 casos similares ocurridos durante todo el 2004. Los observadores de derechos humanos señalaron que los casos de tortura normalmente no fueron el resultado de órdenes provenientes de las altas autoridades, sino que más bien reflejaban las prácticas brutales originadas durante la lucha contra el terrorismo en las décadas de los 80 y 90.

El 21 de febrero, la Policía golpeó a Juan Zamudio Bocangel hasta dejarlo inconsciente, luego de que Zamudio rompiera la ventana de un patrullero. En el mes de julio la tercera fiscalía supraprovincial de Lima acusó a dos efectivos policiales, César Augusto Chávez Aguilar y José Ben de haber cometido tortura agravada.

El 9 de abril, miembros de la Policía en el distrito de La Victoria en Lima, golpearon a Wilmer Cubas Carranza hasta dejarlo inconsciente, luego de que Cubas intentara intervenir en defensa de un amigo que se encontraba detenido. La COMISEDH se encontraba investigando el caso para finales de año.

El caso ocurrido en enero del 2004, en el que Jhon Robert Osorio Morales fue detenido y golpeado por la Policía, fue transferido en el mes de julio a la tercera fiscalía supraprovincial de Lima para una ampliación de la investigación.

Durante el año la COMISEDH estudió el caso del soldado del Ejército Misael Mendoza Carrión ocurrido en julio del 2004. Este soldado fue supuestamente golpeado por un oficial superior por haberse negado a cumplir una orden. Como resultado del abuso al que fue sometido Mendoza está perdiendo la audición lentamente. La 11 fiscalía provincial del Cono Norte de Lima continuaba investigando el caso para finales de año.

En el mes de setiembre, la Corte Penal Nacional, anteriormente llamada Corte Nacional de Terrorismo, aceptó acoger la causa de Pablo Fabio Sánchez Conde, quien en agosto del 2004 fue supuestamente torturado por oficiales de la Policía luego de haber sido detenido conjuntamente con su hermano Miguel. La COMISEDH denunció que los dos hermanos también fueron amenazados por los mismos oficiales de la Policía acusados de abusar de ellos.

Una investigación llevada a cabo por la COMISEDH continuaba sobre lo ocurrido en noviembre del 2004 a Simeón González Illescas, un vendedor ambulante que fue supuestamente golpeado por varios guardias de serenazgo del distrito de La Victoria por negarse a pagar un impuesto local.

No hubo avances significativos en la investigación de los siguientes casos ocurridos en el año 2003 en los que estuvieron involucrados guardias de los penales: la golpiza sufrida por Wilber Escobedo; la supuesta tortura que sufrió un interno del penal de Challapalca y la supuesta tortura de Miguel Angel Vela del Aguila.

El caso ocurrido en el 2003 en el que estuvieron involucrados seis miembros de grupos de autodefensa comunitaria que supuestamente fueron torturados por la Policía continuaba en su etapa instructiva y los seis fueron liberados luego de comprometerse a comparecer ante el juez cuando fueran llamados por este.

En el mes de noviembre el juez a cargo del proceso seguido por la supuesta tortura sufrida por Renzo Vega Hidalgo a manos de la Policía en el 2002, desestimó la causa. La COMISEDH apeló el fallo y la causa continuaba abierta para finales de año.

En el mes de mayo, el fiscal a cargo del caso presentó cargos de tortura contra miembros de la Policía por la golpiza sufrida por Jair Martín Rodríguez y su hermano. Ante la insistencia de la COMISEDH la causa fue devuelta a la Corte Penal Nacional en el mes de julio y la fase oral había comenzado para finales de año.

En el mes de febrero el juez a cargo de la causa encontró culpables a seis guardias de un penal que habían sido acusados de golpear al interno Alfonso Valle Oquendo en el

2002. Los acusados apelaron el fallo y el proceso judicial continuaba para finales de año.

Las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y la Defensoría del Pueblo continuaron monitoreando el trato ofrecido a los reclutas por el Ejército. A diferencia de años anteriores, no hubo informes de golpizas, abusos o asesinatos de soldados de bajo rango a manos de los oficiales en sus cuarteles (ver la Sección 1.a.).

En el mes de febrero, la Corte Suprema de Justicia revisó el proceso entablado contra Raúl Ochoa Ravello en el año 2002, por supuestamente haber atacado al soldado Noé Moisés Canales Salazar. La corte modificó los cargos presentados contra Ochoa de tortura a provocación de heridas que condujeron a la muerte del soldado. La Corte Suprema de Justicia devolvió la causa al juzgado original en Piura para posteriores deliberaciones.

En algunas oportunidades los ciudadanos tomaron la ley por su cuenta, infligiendo severos castigos físicos a personas sospechosas de haber cometido delitos tales como robo, allanamiento de morada, violación y abuso de menores. De acuerdo con estadísticas de la Policía, durante el 2004 hubo casi dos mil incidentes de ese tipo, los cuales resultaron en 19 muertes. La mayoría de estos incidentes ocurrió en el campo, aunque Lima registró un aumento (a 695) de estos casos en los que la muchedumbre atrapó y castigo a sospechosos de robo. Expertos locales señalaron que la falta de presencia policial y la falta de fe en el sistema judicial habían conducido a erupciones violentas contra personas sospechosas de ser delincuentes. Las personas atrapadas fueron golpeadas, amarradas a postes de luz y algunas veces se les roció con gasolina y se les prendió fuego.

Condiciones de los Penales y los Centros de Detención

Las condiciones en los penales fueron muy variadas. Para los internos carentes de fondos, las condiciones fueron desde deficientes hasta extremadamente duras en todas las instalaciones. Los internos que sí contaban con fondos tuvieron acceso a una gama de facilidades. Por ejemplo, a ellos les fue posible tomar sus alimentos en restaurantes localizados dentro de las prisiones o recibir sus alimentos enviados desde fuera. El hacinamiento, la falta de condiciones higiénicas y una nutrición y cuidados médicos deficientes constituyeron graves problemas. Otros problemas serios fueron la inadecuada capacitación de las fuerzas de seguridad y la falta de control dentro del sistema penal. Los internos en todas las prisiones tuvieron un acceso intermitente al agua potable, los baños fueron inadecuados, las cocinas por lo general continuaron sufriendo de una falta de higiene y los internos tuvieron que dormir en los pasillos y áreas comunes debido a la falta de espacio en las celdas. Las drogas ilegales abundaron en muchas prisiones y hubo informes de que la tuberculosis y el VIH/Sida existieron a niveles casi epidémicos. Para los internos comunes, las autoridades penitenciarias contaban con un presupuesto de aproximadamente \$1 (3,14 soles) por interno/por día para cubrir sus alimentos. En la prisión para hombres de San Juan de Lurigancho en Lima, que es la prisión más grande del país, más de siete mil internos se encontraban reclusos en una instalación construida para acomodar a 1.500 internos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó sobre la escasez de personal médico calificado, una representación legal insuficiente y poco confiable para los internos y un número insuficiente de asistentes sociales y psicólogos, así como una falta general de organización en la administración de las prisiones.

Las condiciones fueron particularmente duras en los penales de máxima seguridad ubicados en lugares donde la altitud es muy elevada. Durante el año el gobierno respondió a críticas emitidas por los observadores de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional y clausuró permanentemente el Penal de Challapalca en Tarata, Tacna.

Los guardias de las prisiones y los propios internos abusaron y hostigaron de manera rutinaria a los prisioneros. La corrupción fue un grave problema entre los mal pagados guardias de la prisión. Por ejemplo, algunos guardias, cooperaron con jefes mafiosos dentro de las prisiones encargados de supervisar el contrabando de armas y drogas dentro de las instalaciones.

El poco control ejercido sobre los internos y el hacinamiento de estos contribuyó a la explosión de graves disturbios en el Penal de San Juan de Lurigancho el 8 de febrero, como resultado de esto murieron cinco internos y 25 sufrieron heridas. Expertos en prisiones han advertido que la anarquía en Lurigancho no podrá ser resuelta si no se introducen reformas en el corrupto y sobrecargado sistema judicial. Investigaciones llevadas a cabo por la prensa con posterioridad a los disturbios indicaron que las condiciones existentes en los penales permitían que los delincuentes encarcelados tuviesen tiempo dentro de la cárcel para planificar y beneficiarse de delitos cometidos por cómplices de ellos fuera de los penales.

Antes de ir a juicio, a los detenidos se les mantuvo temporalmente en centros de detención ubicados dentro de las comisarías, edificios del Poder Judicial y en las ciudades grandes, en el Ministerio Público.

En la mayoría de casos, antes de ir a juicio a los detenidos se les mantuvo en el mismo lugar en que se encontraban los internos que ya habían sido sentenciados y condenados.

El gobierno permitió que observadores independientes de derechos humanos visitaran las prisiones, incluyendo al CICR. El CICR realizó 167 visitas inopinadas a internos en 65 diferentes prisiones, centros de detención y centros de detención para menores de edad.

d. Arresto o Detención Arbitrario

La Constitución, el código penal y las leyes antiterroristas prohíben la detención y el arresto arbitrario, aunque la ley orgánica de la Policía Nacional del Perú (PNP) permite que la Policía detenga a una persona a fin de investigarla. La ley exige la presentación de una orden de arresto expedida por un juez al momento de detener a una persona, a menos que esta sea atrapado en el momento en que comete el delito. Únicamente los jueces pueden autorizar una detención, incluyendo los casos de corrupción. Las

autoridades tienen 24 horas para presentar cargos contra la persona arrestada. En casos de terrorismo, narcotráfico o espionaje la presentación de cargos debe ocurrir dentro de los 30 días del arresto. Las autoridades militares deben entregar los detenidos a la Policía dentro de las 24 horas de su arresto; en zonas remotas, esto debe ser hecho tan pronto como sea posible.

El Papel de la Policía y el Aparato de Seguridad

La PNP, con un contingente de 90.385 efectivos, fue la institución responsable de hacer cumplir la ley en el país y funcionó bajo la autoridad del Ministerio del Interior. El modelo de organización del personal de la PNP sigue los mismos lineamientos que la estructura de las Fuerzas Armadas, con un cuerpo de oficiales y personal subalterno. La estructura organizativa está conformada por varias direcciones que se especializan en áreas específicas (tales como secuestros, lucha antidrogas y terrorismo) y comisarías locales. Cada departamento, provincia, ciudad y pueblo cuenta con la presencia de la PNP.

Los expertos han señalado que la PNP tiene un número muy pequeño de efectivos, problemas de profesionalismo, que con frecuencia no fue efectiva en su lucha contra la delincuencia común y que a veces no pudo cumplir con las responsabilidades que se le ha impuesto, tales como la protección de testigos. La corrupción y la impunidad constituyeron un problema.

El Ministerio del Interior y la PNP intentaron hacerle frente a estas debilidades. La unidad de la Policía llamada Escuadrón Verde continuó siendo muy efectiva en sus allanamientos a burdeles clandestinos que con frecuencia estaban involucrados en la trata de personas y otros delitos (ver la Sección 5). Durante el año la PNP destacó a más efectivos policiales de funciones administrativas a las comisarías y unidades responsables de patrullar las calles.

Arrestos y Detenciones

La ley exige que la Policía presente un informe al Ministerio Público dentro de las 24 horas del arresto de un sospechoso detenido mientras se encontraba cometiendo un delito. El Ministerio Público, a su vez, debe emitir su propia evaluación de la legalidad de la acción policial al momento de realizar el arresto.

Las personas son arrestadas abiertamente con una orden emitida por un juez. La ley también establece el derecho del detenido a una rápida decisión judicial. En promedio transcurrieron 20 horas entre el momento del arresto de una persona y su aparición frente a un juez. Los jueces tienen dos horas para decidir si deben liberar o mantener al sospechoso bajo arresto. Existió un sistema de libertad bajo fianza. Sin embargo, limitaciones de naturaleza económica impidieron que muchos acusados pudieran hacer los pagos requeridos. A los detenidos -acusados de haber cometido algún delito- se les permite tener un acceso rápido a un abogado y a miembros de su familia. El Ministerio de Justicia proporcionó a las personas indigentes acceso a la asesoría de un abogado sin costo alguno.

Las personas detenidas por actos de espionaje, narcotráfico, corrupción y terrorismo pueden ser mantenidas bajo arresto por 15 días. La Policía puede mantener incomunicadas a las personas acusadas de terrorismo por los primeros 10 días. El Ministerio Público supervisa los centros de detención, cuyas condiciones también son monitoreadas por la Defensoría del Pueblo.

En la práctica las autoridades no hicieron cumplir las normas arriba mencionadas. Las personas detenidas en zonas remotas en ocasiones fueron retenidas por períodos más largos debido a la dificultad de tener acceso a un abogado y formular cargos contra ellas. Asimismo, algunas comisarías rurales en zonas remotas carecían de instalaciones básicas. La supervisión sobre los centros de detención utilizados para albergar a las personas en espera de juicio generalmente fue más efectiva en las ciudades que en las zonas rurales.

No hubo ningún informe sobre detenidos políticos.

Las detenciones prolongadas antes de la celebración de los juicios y el dictado de las sentencias continuó siendo un problema. De acuerdo con un estudio elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS), de 29.581 personas mantenidas en prisión, un 31 por ciento habían sido sentenciadas, mientras que para un 69 por ciento de ellas sus procesos judiciales no habían concluido. Si un interno es retenido en prisión por más de 18 meses (o 36 meses en casos más complejos) sin ser sentenciado, debe ser liberado.

Durante el año la Corte Superior de Justicia de Lima implementó varias medidas destinadas a modernizar el manejo de los casos y acelerar los procesos judiciales, incluyendo la introducción de mejoras en la administración de los casos y el requisito de que los expedientes de una causa fuesen enviados al fiscal diariamente para su evaluación respecto a la detención previa al juicio.

Durante el año el Poder Ejecutivo nombró a una comisión que debía elaborar un plan para implementar el nuevo código de procedimientos penales aprobado en julio del 2004, a fin de crear un sistema acusatorio en casos penales. El plan elaborado por la comisión recomendó la implementación gradual del nuevo código en un período de cinco años, a partir del año 2006.

e. Negación de un Juicio Público Justo

La ley dispone la existencia de un Poder Judicial independiente y generalmente el gobierno respetó esta disposición en la práctica.

La estructura con tres niveles de juzgados esta conformada por juzgados inferiores y superiores y una Corte Suprema de Justicia compuesta por 30 jueces. Un Tribunal Constitucional conformado por siete miembros opera independientemente del Poder Judicial. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es un órgano independiente encargado de nombrar, disciplinar y evaluar a todos los jueces y fiscales que han ocupado sus cargos por siete años o más. En aquellos casos en que el CNM no certifica

a un juez o fiscal este queda descalificado y no puede seguir desempeñando sus funciones como tal en el futuro.

En el mes de mayo, el gobierno presentó un informe en el que reconocía que los procedimientos utilizados por el CNM violaban los criterios de debido proceso dispuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIADH). Consecuentemente, el gobierno accedió a tomar las siguientes medidas correctivas: el pago de una indemnización de 5 mil dólares (17.200 soles), la introducción de un nuevo procedimiento de evaluación que tendría lugar dentro de los cinco meses siguientes a la resolución de la disputa y la reincorporación de los jueces que habían sido descalificados en sus anteriores cargos u otros de un nivel similar.

La reforma judicial continuó siendo una prioridad del gobierno, pero su implementación fue irregular. Durante el año algunas de las recomendaciones de la CERIAJUS fueron llevadas a la práctica. El Congreso aprobó 13 de 52 propuestas legales presentadas por la CERIAJUS, entre estas aprobó una que proponía la creación de una comisión especial dedicada a hacer un seguimiento a las reformas propuestas por la CERIAJUS. El Poder Judicial creó las siete primeras judicaturas para un juzgado comercial especial y continuó colocando aproximadamente nueve mil decisiones de la Corte Suprema de Justicia en su página Web. Jueces de la Corte Superior y sus administradores también recibieron una capacitación especializada en administración pública.

Adicionalmente, el CNM aprobó nuevas normas (incluyendo sugerencias presentadas por la sociedad civil) para la selección de los jueces y fiscales.

La protección de los testigos continuó mostrando gran debilidad dentro del sistema de justicia. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una ONG que agrupa a muchas organizaciones de derechos humanos, documentó 45 casos de ataques que sufrieron los testigos durante el año. En el mes de febrero, fue atacado un testigo en la causa seguida contra Fernando Zevallos, acusado de narcotráfico y el 1 de junio por tercera vez en 15 meses, atacantes desconocidos intentaron asesinar a Luis Alberto Ramírez, el testigo clave en el juicio contra el General Luis Pérez.

Procesos Judiciales

El sistema de justicia está basado en el Código Napoleónico. Un fiscal investiga los casos y presenta su opinión a un juez de primera instancia que determina si existe suficiente evidencia para iniciar un proceso judicial. Un juez conduce una investigación, determina los hechos, la culpabilidad o inocencia y emite una sentencia. Todos los acusados gozan de la presunción de su inocencia, tienen derecho a estar presentes durante su juicio, tienen derecho a tener un abogado y pueden hacer llamar a testigos. El sistema de defensores públicos con frecuencia no logró asignar abogados calificados para defender a los acusados indigentes. Los acusados pueden apelar a la Corte Superior y luego a la Corte Suprema de Justicia.

Bajo el sistema de justicia militar, los jueces de primera instancia pueden sentenciar y deben emitir su fallo dentro de los 10 días posteriores al inicio del juicio. Una vez sentenciados, los acusados pueden apelar sus condenas ante el Consejo Superior de

Justicia Militar, que tiene 10 días para emitir su fallo. Una apelación final puede presentarse ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, el cual debe emitir su fallo en los próximos cinco días. Dentro del Consejo Superior y el Consejo Supremo de Justicia Militar, un número importante de jueces eran oficiales en actividad con poca o ninguna capacitación legal profesional.

En el mes de agosto del 2004, el Tribunal Constitucional dictaminó que los comandos político-militares creados para mantener el orden durante los períodos de emergencia nacional eran inconstitucionales. Para finales de año las revisiones necesarias para lograr que el Código de Justicia Militar se ajustara a estas decisiones estaban siendo llevadas a cabo por una comisión nombrada por el Ejecutivo que incluía representantes de los Ministerios de Justicia y el Interior, del Poder Judicial, del Ministerio Público y tres jueces.

Durante el año, de conformidad con las decisiones tanto de la CIADH como del Tribunal Constitucional, la Sala Penal Nacional de Terrorismo continuó volviendo a juzgar a acusados previamente condenados en el fuero militar. La Sala Penal Nacional de Terrorismo emitió 250 sentencias. Otros 307 casos se encontraban pendientes. La Sala Penal Nacional de Terrorismo condenó a 65 por ciento de los acusados. Absolvió a 600 personas como resultado de sentencias que ya habían sido cumplidas, reducción de tiempo por cooperación o una falta de solidez en los cargos presentados contra los acusados. Para finales del 2004, había 1.400 personas en prisión sentenciadas por haber cometido actos de terrorismo. El juicio del líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán en el fuero civil continuaba para finales de año.

Durante el año el Tribunal Constitucional emitió dos sentencias que tuvieron importantes repercusiones para los derechos humanos. En la primera de ellas, el Tribunal reiteró el principio de que el fuero civil y no el militar debía ocuparse de los casos de derechos humanos. En la segunda, determinó que las desapariciones constituían un "crimen permanente" y por lo tanto no se encontraban sujetas a términos de prescripción.

Durante el año, la Corte Penal Nacional reabrió casos que involucraban violaciones cometidas en diversas masacres y abusos atribuidos a las fuerzas de seguridad durante la guerra contra Sendero Luminoso en las décadas de los 80 y 90, incluyendo casos tales como Accomarca, Cayara, Chuschi, las muertes en Los Cabitos y las muertes de varios estudiantes en Huancayo. Los juzgados también procesaron 50 casos relacionados con acusaciones de tortura.

En los meses de junio y julio, los casos de Accomarca y Cayara causaron una particular atención cuando los jueces ordenaron el arresto de 147 miembros de las Fuerzas Armadas en relación con estos dos casos. A pesar de la orden emitida, la PNP no detuvo a la mayoría de ellos, actitud que la prensa interpretó como una renuencia de parte de la PNP a enfrentar a las Fuerzas Armadas. Fuentes de la PNP explicaron que los arrestos se estaban produciendo y que las autoridades militares eran las responsables de mantener dentro de sus instalaciones a oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio activo. Los jueces continuaron trabajando con las Fuerzas Armadas, pero la situación continuaba irresuelta para finales de año.

Como un seguimiento a las recomendaciones presentadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la ONG Instituto de Defensa Legal, en colaboración con la Sala Penal Nacional de Terrorismo y las Cortes Superiores de Lambayeque, Ayacucho y Junín, continuaron desplegando esfuerzos para reducir la gran carga de casos pendientes involucrando a personas oficialmente buscadas por actos de terrorismo.

Presos Políticos

No hubo informes sobre presos políticos.

f. Interferencia Arbitraria con la Privacidad, la Familia, el Hogar o la Correspondencia

La ley prohíbe tales acciones y el gobierno generalmente respeta estas prohibiciones en la práctica. Sin embargo, hubo informes de que las autoridades no siempre obtuvieron órdenes judiciales antes de ingresar a una vivienda privada.

A diferencia de años anteriores la COMISEDH no recibió informes del reclutamiento forzado de jóvenes por las Fuerzas Armadas.

Sendero Luminoso continuó obligando a personas indígenas a unirse a sus filas (ver la Sección 5).

Sección 2 Respeto por las Libertades Civiles, incluyendo:

a. La Libertad de Expresión y de Prensa

La legislación establece la libertad de expresión y de prensa, y el gobierno generalmente respetó estos derechos en la práctica y no restringió la libertad académica o el acceso a la Internet. Sin embargo, existieron múltiples denuncias de acoso perpetrado por autoridades provinciales o por grupos privados u organizaciones como las de los campesinos dedicados al cultivo de la coca (*cocaleros*). El acoso se tradujo en ataques a periodistas, detenciones ilegales o amenazas con entablar acciones judiciales.

La prensa independiente se mantuvo activa y expresó una amplia gama de puntos de vista. Todos los medios fueron de propiedad privada excepto un diario, dos canales de televisión y una estación de radio que son de propiedad del Estado.

El 15 de febrero, el gobierno publicó la reglamentación de la Ley de Radio y Televisión aprobada por el Congreso en julio de 2004. El 8 de julio el gobierno nombró a los miembros del Consejo Consultivo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el mismo que regulará la implementación de la ley.

Los periodistas y los medios de comunicación fueron presuntamente intimidados en el transcurso del año. La Asociación Nacional de Periodistas informó sobre 115 casos de acoso (principalmente en provincias). El Instituto Prensa y Sociedad emitió 59 alertas. Estas cifras fueron ligeramente menores a las registradas en el 2004 (121 y 69 respectivamente). La mayor parte de los incidentes se dieron en la forma de ataques

violentos, amenazas, presión judicial, detenciones ilegales y robo de equipos y archivos periodísticos. Muchos de estos casos fueron el resultado de la falta de una presencia efectiva del Estado en muchas zonas del país, factor que contribuyó a la vulnerabilidad de los periodistas frente a ataques provenientes de diversas fuentes.

El 2 de marzo, el alcalde Leopoldo Inga y otros funcionarios locales de la provincia de Alto Amazonas en Loreto atacaron y amenazaron a José Antonio Simons, director de la revista de Yurimaguas *El Huinsho*. Los funcionarios decomisaron un video que el periodista había grabado de una reunión celebrada entre los funcionarios y un fiscal provincial.

El 12 de abril el oficial de la Policía Joel Bardales golpeó a César Hildebrandt Jr., periodista del programa de televisión La Ventana Indiscreta de Canal 2, por investigar el supuesto enriquecimiento ilícito de su hermana, Lady Bardales. Durante la agresión, la cámara de video de Hildebrandt y varios documentos que estaban en su poder le fueron robados.

El 15 de abril, Miguel Ángel Carpio, un periodista del programa El Informe de Tocache y de la estación de radio Marginal fue obligado a abandonar Tocache porque una asociación cocalera lo amenazó de muerte por supuestamente haber vendido un video al gobierno. El video mostraba a la lidereza cocalera Nancy Obregón admitiendo que una parte importante de la producción de coca era vendida a los narcotraficantes. Carpio negó la venta del video.

El 2 de mayo, el congresista Víctor Valdez golpeó a Rufino Zambrano, periodista del diario Ahora de Pucallpa. Valdez había demandado a Zambrano por supuesta falsedad en sus informes sobre las actividades del congresista.

El 4 de mayo, el juez de Lima Alfredo Catacora resolvió que la periodista estadounidense Jane Holligan y la periodista británica Sally Bowen, habían difamado al narcotraficante Fernando Zevallos. Holligan y Bowen habían colaborado en la escritura del libro *El Espía Imperfecto*, en el cual habían citado fuentes que identificaban a Zevallos como narcotraficante. El 27 de junio, la Corte Penal Superior de Lima anuló la sentencia de Catacora debido a irregularidades procesales. La causa fue trasladada a un nuevo juez y a finales del año se encontraba pendiente una sentencia final.

El 17 de julio, Cecilia Valenzuela, directora del programa de televisión La Ventana Indiscreta, difundió una amenaza telefónica recibida el 9 de julio en la cual una mujer le exigía que dejara de investigar a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior.

Continuó la demanda por un millón de dólares (3.44 millones de soles) interpuesta por el congresista Jorge Mufarech en enero del 2004, contra el periodista del diario Correo, Pedro Salinas, por supuesta difamación. En noviembre del 2004 el Poder Judicial exculpó a Salinas. Durante el año Mufarech apeló la decisión y el proceso continuaba abierto para finales del año.

El 19 de junio, Dina Ramírez, de Yungay, informó que había recibido amenazas de muerte. El periodista Antonio de la Torre, esposo de Ramírez, fue asesinado en febrero

de 2004 por David Moisés Julca, que presuntamente actuó en nombre del padre de su novia, el Alcalde de esa localidad, Amaro León. El 14 diciembre las autoridades sentenciaron a León y a su chofer, Pedro Ángeles, a 17 años de prisión. Hasta finales de año la Policía continuaba en la búsqueda de Julca.

El 3 de agosto, un fiscal de Pucallpa presentó cargos contra cuatro personas por estar involucradas en el asesinato del periodista de la radio *Frecuencia Oriental* de Pucallpa, Alberto Rivera. Personas desconocidas asesinaron a Rivera en abril del 2004, un día después de que éste denunciara supuestos vínculos entre el alcalde provincial de Coronel Portillo, Luis Valdez, con narcotraficantes. A mediados de setiembre, el testimonio de uno de los detenidos, Samuel Gonzáles Pinedo, implicó al alcalde Valdez así como a otras personas de su entorno. Hasta finales de año la corte de Pucallpa continuaba investigando el caso.

El 16 de junio un juez de Lima exculpó al director del diario *El Comercio*, Alejandro Miró Quesada Garland, y a tres miembros de su personal, de una demanda por difamación por 100 millones de dólares (346 millones de soles), interpuesta por el narcotraficante Fernando Zevallos en mayo de 2004.

El 17 de enero el Poder Judicial ratificó la orden de detención contra el periodista y escritor Álvaro Vargas Llosa, quien había sido demandado por Adam Pollack en 2001.

El 5 de julio, un tribunal de arbitraje dictaminó que el Estado debía pagar a Baruch Ivcher, propietario de Canal 2, \$6 millones doscientos mil dólares (21 millones trescientos mil soles) como reparación por los daños ocasionados cuando el régimen de Fujimori confiscó su canal de televisión en 1997.

El 26 de enero el Poder Judicial sentenció a diversos ex directores de diarios fujimoristas a cinco años de prisión por haber vendido sus líneas editoriales a favor del régimen de Fujimori. Los sentenciados fueron: Moisés y Alex Wolfenson, José Olaya, Alejandro Estenos, Fernando Oliveri, Pablo Document y Jorge Rivera. Otros miembros de la prensa recibieron sentencias más benignas o evitaron ser sentenciados debido a que permanecieron fuera del país. El gobierno buscó la extradición de varios de ellos, incluyendo las extradiciones de Eduardo Calmell del Solar, José Enrique y José Francisco Crousillat y Ernesto Schutz.

b. Libertad de Asociación y Reunión Pacífica

Libertad de Reunión

La ley estipula la libertad de reunión y el gobierno generalmente respetó este derecho en la práctica.

Aunque la ley no exige que se emita una autorización para que tenga lugar una manifestación pública, los organizadores deben informar a la autoridad política del Ministerio del Interior (el Prefecto) sobre el tipo de manifestación que piensan realizar y el lugar donde esta tendrá lugar. Las manifestaciones pueden prohibirse por razones de

seguridad o salud pública. La Policía utilizó gas lacrimógeno y, ocasionalmente, la fuerza para dispersar a los participantes en varias manifestaciones.

Aunque la mayoría de manifestaciones fueron pacíficas, las protestas en algunos lugares se pusieron violentas y bloquearon vías de transporte esenciales.

El 1 de enero, un grupo que está a favor de la coca, los etnocaceristas, se apoderaron de una comisaría en Andahuaylas que se encuentra en una zona rural, matando a cuatro efectivos policiales. Luego de varios días, las autoridades recuperaron la comisaría y capturaron al líder etnocacerista Antauro Humala que para finales de año permanecía en prisión junto con varios de sus seguidores esperando ser juzgado. En el mes de mayo una huelga agrícola afectó el comercio en 10 regiones cuando los campesinos obligaron al gobierno a comprar cosechas excedentes, en su mayor parte de papas y maíz, a precios por encima del valor impuesto por el mercado.

Las actividades mineras frecuentemente fueron el blanco de manifestantes que se tornaron violentos. El 24 de mayo manifestantes anti-minas en Espinar se apoderaron de parte de las instalaciones de la Mina Tintaya. Los manifestantes procedieron a cometer actos de vandalismo en las oficinas de la mina antes de abandonar las instalaciones, lo que originó que las operaciones de la mina fueran suspendidas por una semana.

La Defensoría del Pueblo emitió informes mensuales en los que señalaba la prevalencia de descontento entre las poblaciones rurales sobre temas que incluían las operaciones mineras, disputas fronterizas, así como huelgas y bloqueos de carreteras por campesinos con el fin de obtener mejores precios para sus cosechas.

Libertad de Asociación

La ley estipula la libertad de asociación y el gobierno generalmente respetó este derecho en la práctica.

c. Libertad de Culto

La ley estipula la libertad de culto y el gobierno generalmente respetó este derecho en la práctica. La Iglesia y el clero católico recibieron beneficios adicionales de parte del gobierno en las áreas de educación, impuestos a la renta, propiedad institucional y remuneraciones. De acuerdo con la ley las Fuerzas Armadas únicamente pueden contratar a capellanes provenientes de la Iglesia Católica y el Catolicismo es la única religión reconocida por el personal militar. Estos factores continuaron causando preocupación sobre un trato desigual para el personal militar no católico.

Las iglesias pueden registrarse de manera voluntaria en la Oficina de Asuntos Eclesiásticos del Ministerio de Justicia a fin de recibir beneficios tributarios y exoneraciones de impuestos a la importación de materiales religiosos.

El Ministerio de Educación exige que se dicten cursos de Religión Católica en todos los colegios públicos y privados, aunque los padres pueden pedir que sus hijos sean

exonerados de este requisito a través de una comunicación por escrito dirigida al director del colegio de estos.

Abusos y Discriminación cometidos por la Sociedad

Durante el año, no hubo informes de abusos o discriminación cometidos por la Sociedad en su conjunto, incluyendo acciones anti-Semíticas.

Para una discusión mas amplia, ver el *Informe Internacional sobre Libertad Religiosa para el 2005*.

d. Libertad de Movimiento dentro del País, Viajes al Extranjero, Emigración y Repatriación

Aunque la ley garantiza estos derechos de libertad de movimiento, la ley permite que las autoridades impidan que personas con causas penales pendientes y, en algunos casos, procesos en la vía civil, puedan salir del país. La Policía tiene autoridad para registrar a los viajeros en los puntos de control distribuidos a través del país.

Sendero Luminoso ocasionalmente interrumpió el libre tránsito de personas colocando obstáculos en algunas carreteras o caminos de los valles del Alto Huallaga en Apúrimac y del Río Ene. Asimismo, campesinos que realizaban manifestaciones también bloquearon los caminos en un intento por presionar al gobierno para que comprara todos los excedentes de sus cosechas.

La ley prohíbe el exilio forzado interno o externo, y el gobierno no lo utilizó.

Aunque la ley prohíbe la revocación de la ciudadanía, los ciudadanos naturalizados pueden perder su ciudadanía por, entre otras cosas, cometer crímenes contra el Estado, contra la defensa nacional y la seguridad pública, así como por razones que "afecten el interés público y nacional".

Protección de Refugiados

La ley garantiza el otorgamiento del estatus de refugiado o asilado de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas de 1951 Relativa al Estatus de Refugiado y su protocolo de 1967 y el gobierno ha creado un sistema par proporcionar protección a los refugiados. En la práctica, el gobierno ofreció protección contra el retorno de personas a un país donde temen ser perseguidas (*non-refoulement*). El gobierno concedió estatus de refugiado o asilo. El gobierno cooperó con el Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas para el otorgamiento un estatus de refugiado y reconoció a la Comisión de Migración Católica (CMC) como el ente oficial encargado de ofrecer ayuda técnica a los refugiados. La CCPM también asesoró a los ciudadanos que temían ser perseguidos y buscó asilo en el exterior para ellos. El gobierno proporcionó protección a refugiados políticos con un sistema de renovación anual. Durante el año la CCPM rechazó las solicitudes de 23 personas que solicitaron el estatus de refugiados.

Sección 3 Respeto por los Derechos Políticos: El Derecho de los Ciudadanos a Cambiar su Gobierno

La Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno de manera pacífica y los ciudadanos ejercieron este derecho en la práctica a través de elecciones justas periódicas y libres realizadas sobre la base de una votación obligatoria y el sufragio universal. En la actualidad los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía pueden votar.

Elecciones y Participación Política

En el 2001 Alejandro Toledo asumió la presidencia en elecciones que generalmente fueron consideradas libres y justas. Los dos partidos principales representados en el Congreso de 120 miembros fueron Perú Posible (33 escaños) y el APRA (28 escaños).

La inscripción de un nuevo partido político requiere contar con las firmas de uno por ciento de los electores que participaron en las elecciones anteriores. El período presidencial es de cinco años y la ley prohíbe la reelección inmediata del presidente. Los grupos que promueven el derrocamiento violento del gobierno están prohibidos de participar en el proceso político.

Hubo 22 mujeres en el congreso de 120 miembros y cuatro presidentes regionales mujeres. Aproximadamente tres por ciento de los alcaldes y 25 por ciento de los regidores elegidos a nivel local fueron mujeres. Hubo dos mujeres en el gabinete ministerial, una mujer ocupó el cargo de Fiscal General de la Nación y hubo una mujer en la Corte Suprema de Justicia. La ley sobre partidos políticos ordena que al menos 30 por ciento de los candidatos en las listas partidarias para cargos elegibles en todos los niveles sean mujeres.

Es inusual que personas de origen indígena, que constituyen más del 33 por ciento de la población, lleguen a ocupar un cargo público. El Congreso contaba con un miembro que se autodeclaró indígena. Tres congresistas representaron a la minoría afroperuana, que se estima que constituye entre un 3 y un 5 por ciento de la población, pero no había ningún afroperuano en el gabinete ministerial.

Corrupción y Transparencia en el Gobierno

La corrupción continuó constituyendo un serio problema y el gobierno tomó medidas para combatirlo.

En diciembre del 2004, el Presidente Toledo nombró a un nuevo fiscal anticorrupción ad hoc, Antonio Maldonado. Durante el año, Maldonado reorganizó la oficina del fiscal ad hoc y creó una base de datos computarizada para mejorar el rastreo de los casos de corrupción de la época de Fujimori y Montesinos, así como casos más recientes.

A pesar de estos avances, el ritmo en el que se condujeron los procesos anticorrupción continuó siendo preocupante. Luego de más de tres años de investigaciones, los juzgados anticorrupción terminaron de procesar 20 de 205 casos. Las autoridades

acusaron a 1.492 personas de actos de corrupción, detuvieron a 87 y colocaron a otras 87 bajo arresto domiciliario. Aproximadamente un 62 por ciento de los casos continuaron en la fase instructiva o de investigación. Los activistas de derechos humanos y los representantes de la sociedad civil señalaron que la ley permite 36 meses de detención sin que se dicte una sentencia y esto abre la posibilidad de que alguno de los acusados pudiera ser liberado a menos que sus casos sean vistos con celeridad.

El 9 de julio, Moisés y Alex Wolfenson, propietarios de un periódico, que venían siendo procesados por corrupción de la prensa y los medios de comunicación durante la época de Fujimori, fueron puestos en libertad como resultado de una decisión de la Corte Suprema de Justicia que puso en aplicación una nueva ley que equiparaba el arresto domiciliario con el arresto en prisión al calcular la cantidad de tiempo que el interno estuvo en prisión. Dos semanas después de su liberación, el Tribunal Constitucional emitió un fallo declarando inconstitucional a la nueva ley y los Wolfenson debieron regresar a la cárcel. Posteriormente el Congreso revocó esta ley.

Una ley garantiza el acceso del público a información del gobierno y la mayoría de Ministerios y principales entidades proporcionaron información clave en sus páginas web. Sin embargo, la implementación de esta ley fue incompleta, particularmente en las zonas rurales. Adicionalmente, hubo un desconocimiento generalizada de la ley y relativamente pocos ciudadanos comprendieron y ejercitaron su derecho a la información. A través de un informe emitido anualmente, la Defensoría alentó a los gobiernos regionales a adoptar prácticas que promueven la transparencia. La Defensoría también supervisa el cumplimiento de los gobiernos regionales respecto a un requisito legal que los obliga a celebrar audiencias públicas sobre sus actividades, al menos dos veces al año.

El 10 de julio, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) solicitó que el Presidente revisara una nueva ley de inteligencia que según la CPP contradecía a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La CPP señaló que la ley de inteligencia definía la seguridad nacional en términos ambiguos e imponía períodos de encarcelamiento excesivos por la publicación de información confidencial del gobierno.

Sección 4 Actitud del Gobierno Relacionada con las Investigaciones Internacionales y No Gubernamentales de Supuestas Violaciones de Derechos Humanos

Muchos grupos de derechos humanos nacionales e internacionales operaron sin restricciones de parte del gobierno, pudiendo investigar y publicar sus hallazgos sobre casos de derechos humanos. Los funcionarios de gobierno generalmente cooperaron y fueron receptivos a sus puntos de vista.

De acuerdo con la COMISEDH, los comandantes militares continuaron negando el acceso de los observadores de derechos humanos a las instalaciones militares. Para poder obtener información sobre actividades en esas áreas las ONGs debieron recurrir a la intermediación de la Defensoría del Pueblo.

El gobierno continuó implementando las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) del año 2003, que señaló que

aproximadamente 69 mil personas murieron durante el conflicto armado entre los años 1980 y 2000. Durante el año las autoridades presentaron cargos formales en varias causas acogidas por el gobierno que involucraban a unos 300 efectivos militares y ex-militares. El gobierno también pidió a la ONG: Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional (CEPRODEP), dirigida por un miembro de la CVR y experto en Sendero Luminoso, Carlos Tapia, que diseñara un plan para efectuar las reparaciones a las víctimas. La mayoría de las recomendaciones del CEPRODEP involucraron reparaciones colectivas para las zonas afectadas por la violencia. Algunos antiguos miembros de la CVR y muchas ONGs de derechos humanos recomendaron y promovieron la creación de un registro de las víctimas y alguna forma de reparación individual. Para finales de año, el gobierno no había implementado ninguna de las recomendaciones.

Sección 5 Discriminación, Abusos de la Sociedad y Trata de Personas

Aunque la Constitución prohíbe la discriminación basada en la raza, el género, la discapacidad, el idioma o el estatus social; la discriminación contra las mujeres, las personas con discapacidad, los indígenas y las minorías raciales y étnicas persistieron. Hubo avances en varias áreas.

Mujeres

La violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo la violación, el abuso conyugal y el abuso sexual, físico y mental constituyó un problema crónico. Los abusos fueron aun peores debido a la falta de sensibilidad de parte de las autoridades policiales y judiciales hacia las víctimas de sexo femenino.

La ley prohíbe la violencia doméstica y las penas van de un mes a seis años en prisión. La ley otorga a los jueces y fiscales la autoridad para evitar que el cónyuge o padre/madre encontrado culpable regrese al hogar familiar. La ley también permite que los parientes de la víctima y otras personas no relacionadas con la víctima que viven en la misma casa puedan presentar una denuncia de violencia doméstica y autoriza a cualquier profesional de la salud a certificar los daños ocasionados. La ley exige que la investigación policial sobre casos de violencia doméstica tenga lugar dentro de los cinco días posteriores al hecho y ordena que las autoridades extiendan su protección a las mujeres y niños que son víctima de violencia doméstica.

Los centros del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) reportaron 25.863 casos de violencia doméstica ocurridos durante el año. Estos centros atendieron a un promedio de 2.500 hombres y mujeres al mes. El MIMDES también operó una línea telefónica gratis para emergencias que atendió 8.892 pedidos de ayuda en relación con problemas familiares.

Organismos dedicados a la mujer señalaron que el abuso del alcohol y actitudes tradicionales hacia la mujer agravaron los problemas de violación y abuso sexual, particularmente en las zonas rurales.

El MIMDES y algunas ONGs señalaron que muchos casos de abuso doméstico nunca fueron reportados. Las fuentes de las ONGs afirmaron que la mayoría de casos

reportados no resultaron en la presentación de cargos contra el perpetrador del abuso doméstico debido al temor a alguna represalia por parte del cónyuge denunciado o debido al costo involucrado en la gestión de la denuncia. Adicionalmente, la protección legal y física se vio limitada por demoras en los procesos judiciales, ambigüedades en la ley y la falta de refugios alternativos e ingresos para las víctimas.

El MIMDES administró el Programa de Emergencia de la Mujer que se centró en los problemas legales, psicológicos y médicos que deben confrontar las mujeres y niños que son víctima de la violencia doméstica. El MIMDES operó 39 centros conformados por representantes de varias entidades gubernamentales, incluyendo la Policía, los fiscales, los consejeros y asistentes sociales encargados de ayudar a las víctimas de violencia doméstica.

El MIMDES continuó desplegando sus esfuerzos por sensibilizar a los empleados de gobierno y a la ciudadanía en general sobre el tema de violencia doméstica. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo siguió quejándose sobre la manera indiferente en la que reaccionan los funcionarios al recibir denuncias de violencia doméstica a pesar de la exigencia que impone la ley sobre las comisarías para que reciban tales denuncias.

La ley considera que cualquier violación, incluyendo la violación sufrida a manos del cónyuge, constituye un delito y el gobierno hizo cumplir la ley de manera efectiva. La legislación también impone penas a aquellos que obtienen beneficios económicos de la trata de personas, la pornografía infantil a través de la Internet y el turismo sexual que involucra a niños. Las penas impuestas a los proxenetas y clientes de prostitutas menores de edad van desde los cuatro hasta los ocho años en prisión.

La prostitución es legal para mujeres mayores de 18 siempre y cuando se registren con las autoridades municipales y porten una certificación sanitaria. En la práctica, la mayor parte de las prostitutas trabajó en el sector informal donde carecían de protección para su salud. Las ONGs informaron que los tratantes de personas seducían a números cada vez más altos de mujeres menores de edad para que ingresaran a la prostitución (ver la Sección 5, Trata de Personas).

El acoso sexual fue un problema. La ley define el acoso sexual como una violación de los derechos laborales sujeto a un castigo administrativo. El castigo varía dependiendo de la situación profesional donde tiene lugar el acoso, como por ejemplo, si este tiene lugar en el sector Educación o el sector privado, el servicio doméstico, las Fuerzas Armadas y la Policía.

La ley estipula la igualdad entre hombres y mujeres y prohíbe la discriminación contra las mujeres en relación con el matrimonio, el divorcio y los derechos de propiedad. La discriminación racial y sexual en los avisos de empleo o anuncios de oportunidades educacionales estuvieron prohibidos, aunque continuaron ocurriendo en la práctica. La ley prohíbe el despido arbitrario de mujeres embarazadas.

Conceptos tradicionales y equivocados con frecuencia impidieron el acceso de las mujeres a roles de liderazgo tanto en el sector público como en el privado. Las mujeres, especialmente de las clases altas y medias, avanzaron en años recientes a roles de

liderazgo en varias compañías y entidades gubernamentales, donde, de acuerdo a ley, deben recibir igual paga por igual trabajo. Debido a prejuicios sociales y discriminación, la mujer históricamente ha sufrido de manera desproporcionada las consecuencias de la pobreza y el desempleo generalizados que sufre el país.

Los organismos defensores de los derechos de la mujer, tales como Flora Tristán y Manuela Ramos, investigaron los casos de discriminación contra la mujer y sugirieron maneras de enfrentar este problema que con frecuencia involucró una tarea educativa y esfuerzos por cambiar las actitudes tradicionales.

Niños

El gobierno estuvo comprometido con los derechos y el bienestar de los niños.

La educación fue gratis y obligatoria a través de la escuela secundaria y generalmente estuvo disponible en todo el país, aunque hubo una escasez de maestros calificados, principalmente en la región de la selva. Los pagos por los uniformes y libros con frecuencia fueron demasiado altos para las familias. Debido, en gran parte, a la pobreza generalizada, aproximadamente un tercio de los niños y adolescentes en edad escolar debieron trabajar durante el día en vez de asistir a la escuela. Los niños que vivían en situación de pobreza en promedio completaron 7, 8 años de estudios comparado con 9,4 años de estudios completados por niños que vivían por encima de la línea de pobreza. Según datos sobre la población publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INEI) en el 2001, el 92 por ciento de los niños de entre 6 y 11 años asistieron a la escuela, así como el 66 por ciento de adolescentes entre las edades de 12 y 17. La inasistencia escolar fue más alta en las zonas rurales y selváticas.

El Ministerio de Educación operó escuelas nocturnas para trabajadores adolescentes y continuó ofreciendo un programa de tutores en escuelas diurnas, a través de este programa los maestros proporcionaron una ayuda extra a los estudiantes que trabajaban. Durante el año el Ministerio también inició un programa para enseñar a los niños sus derechos, de forma que estuvieran mejor preparados para defenderse contra la explotación.

Los últimos informes del INEI para el 2004 indicaron una reducción en la tasa de pobreza extrema de un 33 por ciento en el 2002 a un 26 por ciento en el 2004. El programa de salud integral del gobierno ofreció a las madres pobres y a sus bebés, así como a sus hijos en edad escolar acceso a cuidados médicos. El programa incluye a aquellos niños que no asisten a la escuela. Tanto los niños como las niñas tuvieron el mismo acceso a los servicios de salud bajo este sistema.

La violencia contra los niños y el abuso sexual de los niños constituyeron un serio problema. Basado en información proporcionada por sus centros de emergencia para la mujer, el MIMDES informó que durante el 2004 hubo 769 casos de violencia o abuso sexual de niños menores de cinco años, 1.879 de estos casos afectaron a niños de entre 6 y 11 años y 2.721 de estos casos afectaron a niños de entre 12 y 17 años de edad.

Las ONGs señalaron que muchos casos de abuso nunca fueron reportados a las autoridades, ya que muchas personas consideraban que estos problemas pertenecían al núcleo familiar y debían ser resueltos de manera privada. El Programa de Emergencia de la Mujer intentó hacer frente a los problemas que debieron confrontar los niños que habían sido víctimas de la violencia.

La Dirección de la Niñez del MIMDES coordinó las políticas y programas gubernamentales relacionadas con los niños y los adolescentes. A nivel básico, 1.312 Oficinas para la Protección de los Derechos y el Bienestar del Niño recibieron y resolvieron denuncias que iban del abuso físico y sexual de los niños al pago de alimentos, abandono y tutoría no resuelta. Los gobiernos provinciales o distritales operaron aproximadamente 46 por ciento de estas oficinas, mientras que las escuelas, iglesias y ONGs administraron el otro 54 por ciento. La mayoría de oficinas estuvo atendida por estudiantes de derecho; únicamente las oficinas de los distritos más ricos del país contaban con abogados, psicólogos y asistentes sociales profesionales. En aquellas ocasiones en las que estas oficinas no podían resolver los casos, los funcionarios normalmente enviaron a los usuarios a las fiscalías del Ministerio Público. Los fallos de estas oficinas tuvieron fuerza de ley tan igual como el fallo emitido en un juzgado.

La trata de niños fue un problema (ver la Sección 5, Trata de Personas).

El trabajo infantil fue un problema grave (ver la Sección 6.d.).

Trata de Personas

Las leyes sobre la trata de personas prohíben la trata de personas e imponen penas de 5 a 10 años de prisión para aquellos que trasladan a una persona, ya sea dentro del país o a una zona fuera del país, para propósitos de explotación sexual (incluyendo la prostitución, la esclavitud sexual o la pornografía). Si la víctima de la trata de personas es menor de 18 años, el castigo fluctúa entre 10 y 15 años de prisión. Las leyes que prohíben el secuestro, el abuso sexual de menores y el empleo ilegal se hicieron cumplir y también podían ser empleadas contra aquellos involucrados en la trata de personas.

Durante el año el Ministerio de la Mujer tomó el liderazgo en la lucha contra la trata de personas.

El MIMDES logró que miembros de la Policía local, jueces, ONGs y otros colaboraran en una Campaña contra la Explotación Sexual de los Niños (CESN) en Iquitos. En el mes de abril, el MIMDES auspició un seminario que proponía un modelo de intervención para los operativos policiales contra la trata de personas y la CESN.

El MIMDES también organizó una campaña publicitaria conjuntamente con el Ministerio de Justicia (MINCETUR) a fin de promover la toma de conciencia en Iquitos. El MINCETUR proporcionó a las aerolíneas nacionales videos para ser proyectados en los aviones y distribuyó volantes en los aeropuertos advirtiendo a los turistas que el turismo sexual puede resultar en la imposición de condenas a largos años en prisión.

Entre los meses de agosto y noviembre, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) co-auspició un programa de capacitación CESN para la Policía en seis ciudades (Lima, Iquitos, Cusco, Tarapoto, Chiclayo, Tacna). Representantes de ONGs señalaron que la PNP había incorporado el curso al curriculum oficial de la Academia de Policía.

El Comité Multisectorial, un esfuerzo de colaboración entre Ministerios y ONG's nacionales e internacionales, implementó varias medidas contra los tratantes de personas. Los oficiales de la PNP allanaron burdeles clandestinos repetidas veces, lo cual resultó en el rescate de varias jovencitas que pudieron ser devueltas a sus familias. Para finales de año, un tratante de personas internacional permanecía bajo arresto esperando ser juzgado. Las autoridades detuvieron a otros tratantes de personas peruanos en allanamientos que realizaron y luego los liberaron en espera de que concluyeran investigaciones que aun se encontraban pendientes.

El 29 de diciembre, las autoridades sentenciaron al Congresista Torres Ccalla a ocho años en prisión por cargos de violación surgidos de su relación con una joven menor de edad. Torres Ccalla había traído a la jovencita a Lima desde su hogar en Puno, supuestamente para que trabaja en su oficina.

María Yataco, supuestamente relacionada con un grupo de personas dedicadas a la trata de personas en el Japón, permanecía bajo custodia y las autoridades presentaron cargos adicionales en su contra.

No hubo ningún avance significativo en el caso de Liliana Mendoza, una víctima de la trata de personas rescatada en el 2003 de un burdel en la ciudad de Trujillo por la PNP y representantes de una ONG.

Aunque no existieron estimados autorizados sobre la magnitud de la trata de personas, hubo informes sobre personas que habían sido víctimas de esta práctica tanto dentro del país como luego de ser enviadas al extranjero.

La trata de personas hacia España y particularmente, hacia el Japón, operó a través de redes de crimen organizado.

La trata de personas en el ámbito nacional fue un problema mucho mayor. Las ONGs y los organismos internacionales sostuvieron que la trata de personas en el territorio nacional ocurrió a niveles significativos, particularmente el traslado de jovencitas menores de edad desde la Región del Amazonas o desde la sierra a las ciudades o zonas de trabajo minero donde fueron utilizadas como prostitutas o se desempeñaron como empleadas domésticas. Esta trata de personas se llevó a cabo a través de redes informales en las que podían participar los propios novios y hasta las familias de las jóvenes víctimas.

La Organización Internacional para la Migración operó una línea telefónica de emergencia dentro del Ministerio del Interior para recibir información sobre incidentes de trata de personas así como para promover campañas de información y la capacitación de los funcionarios de gobierno en temas relacionados con la trata de personas.

Personas con Discapacidades

La legislación prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidades y les garantiza "protección, cuidado, rehabilitación y seguridad". La ley también estipula que los espacios públicos deben encontrarse libres de obstáculos, que los edificios deben contar con un diseño arquitectónico que los haga accesibles y dispone el nombramiento de un especialista en los derechos de las personas con discapacidades dentro de la Defensoría del Pueblo.

Aunque se prestó más atención a las personas con discapacidad, el gobierno asignó pocos recursos a los esfuerzos que se realizan en este campo. Muchas personas con discapacidades continuaron sufriendo marginación social y económica.

Aunque la ley prohíbe la discriminación en el centro de trabajo, no especifica las fuentes de donde deben obtenerse los fondos necesarios para solventar los programas destinados a permitir que los trabajadores con discapacidades sean productivos. Como resultado de esto, las personas con discapacidades y las entidades privadas que les prestan sus servicios generalmente debieron depender de la caridad pública y de los fondos provenientes de organismos internacionales.

A pesar de que las normas de construcción estipulan la necesidad de contar con accesos libres de obstáculos en los edificios en los que se ofrecen servicios públicos para ser utilizados por las personas con discapacidades físicas, no se hizo mayor esfuerzo por implementar tal disposición. No existieron facilidades, tales como contar con intérpretes para las personas sordas en las oficinas gubernamentales que brindan servicios ni el uso del sistema Braille o grabaciones para las personas ciegas. El 25 de mayo, el gobierno publicó una ley que exigía que los organismos públicos y las universidades permitieran que las personas ciegas pudieran tener acceso a sus páginas web a través del empleo de programas de software que leyeran en voz alta el contenido de la página web. La ley estableció un período de 120 días para que estas instituciones implementaran los cambios necesarios o de lo contrario deberían pagar dos mil dólares de multa (6.440 soles). Los observadores temían que la ley, aunque bien intencionada, podría no llegar a aplicarse.

Según funcionarios del Instituto de Seguridad Social, menos del uno por ciento de personas con discapacidad severa, en realidad se encontraba trabajando. Algunas compañías privadas desarrollaron programas para emplear y capacitar a personas con discapacidad y una fundación privada proporcionó pequeños préstamos a personas con discapacidad con el propósito de ayudarlas a iniciar un negocio. Sin embargo, las personas con discapacidad fueron discriminadas por sus potenciales empleadores.

Minorías Nacionales, Raciales y Étnicas

La Constitución establece que todos los ciudadanos deben gozar de igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación por motivos de raza, origen e idioma. La ley penaliza la discriminación racial. La población estuvo compuesta por varias minorías raciales, las más numerosas de ellas fueron las conformadas por personas descendientes de

asiáticos y africanos. Los afroperuanos, que por lo general estuvieron concentrados a lo largo del litoral, con frecuencia sufrieron discriminación y fueron víctimas de los prejuicios sociales, constituyendo uno de los grupos más pobres del país. Las organizaciones que luchan por los derechos civiles de los afroperuanos señalaron que las encuestas y censos oficiales no reflejaban sus números de manera exacta.

Por lo general los afroperuanos no ocuparon cargos de liderazgo en el gobierno, la empresa privada o las Fuerzas Armadas. Existía la creencia generalizada de que tanto la Marina de Guerra como la Fuerza Aérea seguían una política no declarada destinada a reducir a un mínimo el número de oficiales negros. Aunque la ley prohíbe que los anuncios de empleo que aparecen en los periódicos especifiquen la raza de los candidatos que se están buscando, algunas ONGS afirmaron que a menudo los empleadores encontraron formas sutiles de no emplear a personas de raza negra o relegarlos a ocupaciones con bajas remuneraciones en el área de servicios. Con frecuencia los empleadores exigieron que los solicitantes de un empleo proporcionaran fotos de sí mismos para asegurarse que tuvieran la "presencia" correcta para los puestos anunciados. A pesar de que la ley prohíbe diversas formas de discriminación de parte de tiendas y comercios contra sus posibles clientes, no logró impedir que continuaran las prácticas discriminatorias. Con frecuencia los ciudadanos afroperuanos fueron presentados de manera poco favorable por la industria del entretenimiento, mostrándolos como personas poco confiables o caracterizándolos a través de estereotipos cómicos.

Durante el año elementos de la sociedad civil y del gobierno colaboraron a fin de limitar la discriminación basada en el color de las personas. La Coordinadora de Derechos Humanos con sede en Lima, creó un grupo de trabajo anti-racismo conformado por varias ONGs dedicadas a la lucha por los derechos humanos. El grupo realizó manifestaciones, publicó artículos y en el mes de marzo, identificó a las compañías que utilizaban imágenes racistas y socialmente excluyentes en la publicidad.

El 26 de agosto, un juzgado especial para los derechos del consumidor multó a una discoteca muy elegante de Lima por sus prácticas de discriminación racial contra consumidores al no permitir ingresar a sus instalaciones a algunos ciudadanos dependiendo de su apariencia física. El fallo determinó que se debía continuar con investigaciones para garantizar que la discoteca no volvería a incurrir en prácticas discriminatorias.

Personas Indígenas

A pesar de que la legislación prohíbe la discriminación por motivos raciales y garantiza el derecho de todos los ciudadanos a hablar su lengua materna, la mayoría de las personas indígenas y los mestizos con rasgos indígenas debieron soportar una discriminación y prejuicios sociales generalizados. Muchos factores impidieron su capacidad de participar en la toma de decisiones y facilitaron su exclusión deliberada de estas decisiones, las mismas que afectaban directamente a sus tierras, su cultura, sus tradiciones y el uso otorgado a los recursos naturales. La discriminación y los prejuicios sociales generalizados intensificaron los sentimientos de inferioridad y la percepción de ser ciudadanos de segunda clase. Muchas personas indígenas carecieron de los

documentos de identidad básicos necesarios para identificarlos como ciudadanos de pleno derecho y permitirles jugar un papel activo en la sociedad (ver la Sección 5, Otros Abusos de la Sociedad).

Otros factores también contribuyeron a la marginalización de las personas de origen indígena en la sociedad. El transporte ineficiente, las barreras en el idioma y la inadecuada infraestructura en el área de las comunicaciones en la sierra y en la región de la selva amazónica dificultaron la movilización y la organización de estas poblaciones. El aislamiento geográfico sufrido por la mayor parte de la población indígena y la centralización del gobierno en Lima contribuyeron a limitar aún más el acceso y la participación de los indígenas en la sociedad. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informó que las personas de origen indígena no gozaban de un acceso igualitario a los servicios públicos, particularmente en las áreas de salud y educación: 90 por ciento vivía en condiciones de pobreza; sólo un 39 por ciento había completado sus estudios de primaria; y la mortalidad materno-infantil en los lugares de residencia de las poblaciones indígenas era más alta, en estos lugares únicamente un 20 por ciento de los nacimientos tuvo lugar en centros de salud pública.

La población nativa de la región del Amazonas, estimada entre 200.000 y 300.000 personas, debió sufrir una discriminación y prejuicios sociales generalizados. De conformidad con la cultura y tradiciones locales, la mayoría de las comunidades indígenas mantenían una relación espiritual con su tierra, y el concepto de la tierra como un bien comercial era ajeno a ellas. Sin embargo, según el director del Programa de Comunidades Indígenas de la Defensoría del Pueblo, el único derecho consagrado por la ley para dicha población indígena con respecto a su tierra es la condición de "inasignabilidad" de las tierras, la misma que evita que el título de tales tierras le sea reasignado a algún arrendatario no indígena por derecho de posesión. Sin embargo, no existió una prohibición de la comercialización y venta de las tierras.

Los grupos de pobladores nativos continuaron oponiéndose a la usurpación de sus tierras. Muchos indígenas no contaban con el título de propiedad de la tierra en la que vivían. En el caso de aquellos que sí lo tenían, el título de propiedad no incluye los minerales u otros derechos al subsuelo, los mismos que pertenecen al Estado; este problema ocasionó conflictos entre los intereses mineros y las comunidades indígenas.

El 15 de abril el Presidente Toledo suscribió un decreto por medio del cual se creó el Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (INDEPA), el mismo que reemplazó a la Comisión Nacional sobre la Región Amazónica y Asuntos Indígenas y Afroperuanos. El INDEPA debe promover las políticas de gobierno sobre los derechos de los pueblos indígenas y servir de coordinador entre el gobierno y las organizaciones indígenas. El INDEPA tienen rango de Ministerio y estará dirigido por un concejo gubernamental conformado por representantes de diferentes Ministerios, ONGs y representantes elegidos por las comunidades indígenas. A diferencia de la institución que lo precedió el INDEPA tendrá su propio presupuesto.

Sendero Luminoso continuó siendo uno de los principales violadores de los derechos del pueblo indígena. Este grupo terrorista obligó a campesinos indígenas a unirse a sus filas

y les exigió el pago de cupos de guerra. La presión terrorista sobre las comunidades indígenas continuó durante el año.

Otros Abusos y Discriminación de la Sociedad

La Constitución garantiza a toda persona el derecho a tener un nombre, una nacionalidad, al reconocimiento legal y al ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Sin embargo, algunas fuentes han estimado que más de un millón de ciudadanos indocumentados, incluyendo al menos 312.000 mujeres, no contaban con documentos de identidad y por lo tanto no pudieron hacer valer estos derechos. Aproximadamente 15 por ciento de los nacimientos no fueron inscritos y anualmente 95 mil personas nacieron sin que se les extendiera una partida de nacimiento. Las mujeres y los niños indígenas pobres en las áreas rurales constituían una gran parte del grupo de ciudadanos que carecía de sus documentos de identidad básicos.

Los ciudadanos indocumentados fueron marginados social y políticamente y tuvieron dificultades en acceder a los servicios que proporciona el gobierno. Además, debieron hacer frente a barreras para la inscripción de sus hijos, para ser candidatos a algún cargo político, o para tener un título de propiedad de la tierra o de sus casas.

Uno de los obstáculos más importantes para obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) fue el requisito de presentar documentos sustentatorios, tales como una partida de nacimiento y un recibo de luz o agua a las autoridades que emiten los DNI. Las mujeres que viven en zonas rurales y que no tuvieron a sus hijos en algún centro de salud no recibieron los certificados de nacido vivo necesarios para obtener la partida de nacimiento. Estas mujeres también debieron confrontar obstáculos al tratar de obtener la partida de nacimiento de manera retroactiva. En un esfuerzo por reducir la mortalidad infantil, el Ministerio de Salud multó a las mujeres que no tuvieron sus hijos en clínicas u hospitales. En muchas zonas rurales, estas mujeres no tuvieron dinero para pagar las multas y, consecuentemente, no registraron a sus niños.

El 17 de febrero, el MIMDES, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Instituto Nacional para el Bienestar de Niños y Adolescentes, varias empresas de servicios públicos, la Iglesia Católica y diversas compañías privadas, dieron inicio a la "Cruzada Nacional para el Derecho a un Nombre". La campaña tuvo el propósito de elevar la toma de conciencia entre los padres sobre la importancia de obtener una partida de nacimiento para sus hijos. La coalición también llevó a cabo muchos eventos dedicados a la educación pública y la capacitación de funcionarios locales a fin de promover un registro universal de nacimientos. La coalición señaló que 21 mil nacimientos adicionales habían sido inscritos como resultado de sus actividades.

A pesar de que no existen prohibiciones oficiales, los homosexuales sufrieron una discriminación generalizada. Durante el año hubo indicios de que los homosexuales ganaron una mayor notoriedad. El 16 de julio, varios cientos de lesbianas, homosexuales y bisexuales realizaron una marcha en el centro de Lima por el cuarto año consecutivo. La Congresista Cecilia Tait, autora de un proyecto de ley que prohíbe la

discriminación sexual, dirigió unas palabras a los manifestantes. Informes de prensa anunciaron la conformación de un grupo de padres de homosexuales que tenía el propósito de promover la comprensión de miembros homosexuales en una familia y proporcionarse apoyo mutuo.

Sección 6 Derechos del Trabajador

a. Derecho a Asociarse

A pesar de que la Constitución garantiza el derecho a la asociación, los defensores de los derechos del trabajador señalaron que las leyes fueron demasiado restrictivas. A los jueces, fiscales y miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas no se les permitió crear o unirse a un sindicato. Aproximadamente un 5 por ciento de la fuerza laboral perteneciente al sector formal de la economía -que alcanza los 8,5 millones- estuvo afiliada a algún sindicato organizado.

Las normas laborales estipulan que los trabajadores pueden formar sindicatos sobre la base de su ocupación, la afiliación del empleador o la ubicación geográfica de su centro de trabajo. Los trabajadores no necesitaron obtener una autorización antes de formar un sindicato, y de acuerdo a ley los empleadores no podían condicionar el empleo a la sindicalización o falta de sindicalización del trabajador.

Aunque la ley norma las horas que deben trabajar los empleados domésticos y establece derechos fundamentales de estos trabajadores, la capacidad limitada que posee el Ministerio de Trabajo para verificar las condiciones de trabajo de los trabajadores minimizó la efectividad de esta ley.

b. El Derecho a Organizarse y Negociar Colectivamente

La Constitución reconoce el derecho de los trabajadores del sector público y privado a organizarse y negociar colectivamente, pero especifica que este derecho se debe ejercer en armonía con objetivos sociales más amplios. Un sindicato tiene que representar por lo menos a 20 trabajadores para convertirse en agente oficial de una negociación colectiva. Los representantes podían participar en negociaciones colectivas y fijar las fechas y horas para la conducción de las negociaciones.

Aunque existe un sistema de conciliación y arbitraje, los líderes sindicales se quejaron de que la proporción de los costos de arbitraje que debían asumir a menudo excedió los recursos con los que contaban. Además, los líderes sindicales afirmaron que, como la ley prohíbe a los trabajadores temporales de participar en el mismo sindicato que los trabajadores permanentes, las compañías han recurrido a la práctica de contratar trabajadores de manera "temporal" para evitar un aumento en el número de miembros del sindicato. La ley restringe el número de trabajadores temporales que pueden ser contratados a un 20 por ciento de la fuerza laboral de una compañía, aunque los defensores de los derechos del trabajador señalaron que algunas compañías no respetaron este límite.

La ley garantiza el derecho a ir a la huelga y los trabajadores ejercieron este derecho en la práctica. La ley restringe el derecho de ir a la huelga a los sindicatos que representan a los trabajadores en servicios públicos considerados como esenciales por el gobierno y exige que los huelguistas notifiquen al Ministerio de Trabajo por anticipado sobre sus intenciones de llevar a cabo la huelga. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, hubo una sola huelga legal y 45 huelgas ilegales entre los meses de enero y agosto. Los dirigentes sindicales afirmaron que era difícil obtener la autorización para una huelga legal y pensaban que el Ministerio de Trabajo se sentía reacio a hacerlo por temor a dañar la economía.

Existen cuatro zonas donde se procesan las exportaciones (ZPE). Las normas especiales que rigen las ZPE permiten la utilización de la mano de obra temporal que se requiera, una mayor flexibilidad en los contratos de trabajo y la fijación de los salarios sobre la base de la oferta y la demanda.

c. Prohibición de Trabajo Forzado u Obligatorio

Aunque la Constitución prohíbe el trabajo forzado u obligatorio, incluyendo el realizado por niños, existieron informes de que esas prácticas tuvieron lugar.

Los narcotraficantes y terroristas pertenecientes a Sendero Luminoso mantuvieron cautivas a familias indígenas, incluyendo a menores de edad, en zonas remotas, obligándolos a trabajar para ellos y cultivar diversos productos agrícolas y la hoja de coca (ver la Sección 5). También hubo informes que indicaban que los taladores ilegales de madera emplearon a trabajadores forzados a trabajar en la región del Amazonas.

d. Prohibición del Trabajo Infantil y Edad Mínima de Empleo

Aunque las leyes imponen límites al trabajo de los niños dependiendo de su edad, las horas trabajadas y la ocupación desempeñada, el trabajo realizado por los niños continuó siendo un grave problema. En la práctica las disposiciones de la ley fueron violadas de manera rutinaria en el sector informal de la economía. La edad mínima legal para el empleo es 14 años. Sin embargo, los niños de entre 12 y 14 años de edad pueden trabajar en ciertas labores por un máximo de 4 horas al día y los adolescentes de entre 15 y 17 años de edad pueden trabajar hasta 6 horas al día si obtienen un permiso especial que emite el Ministerio de Trabajo y certifican que continúan asistiendo a la escuela.

En ciertos sectores de la economía, estuvieron vigentes edades mínimas más altas: 15 años de edad para las labores industriales, comerciales o de minería y 16 años en la industria pesquera. La ley prohíbe que los niños realicen ciertos tipos de labores, tales como el trabajo subterráneo o uno que implique tener que alzar y cargar objetos pesados, o uno donde al niño o al adolescente se le hace responsable por la seguridad de otras personas, el trabajo nocturno, o cualquier trabajo que comprometa la salud de los niños o adolescentes, o ponga en riesgo su desarrollo físico, mental y emocional, o impida su asistencia regular a una escuela.

En el mes de enero el Ministerio de Trabajo creó una Oficina especial para la Protección del Trabajo de Menores (PTM). La PTM emitió permisos autorizando a personas menores de 18 a trabajar legalmente bajo condiciones consideradas aceptables bajo la ley. Durante el año la PTM otorgó 898 autorizaciones para trabajos en el sector formal a niños de entre 12 y 17 años de edad.

El INEI estimó que 2,3 millones de niños de entre 6 y 17 años se encontraban trabajando, de los cuales 1,9 millones trabajaban en el sector informal.

Los tipos de trabajo realizados por menores de edad variaron. En las zonas rurales, muchos niños trabajaron en pequeñas granjas con sus padres, en minería artesanal o fueron enviados a la ciudad para trabajar como empleados domésticos. En las zonas urbanas, los niños con frecuencia trabajaron en las calles, entreteniéndolos a la gente, vendiendo dulces, mendigando o limpiando zapatos; o como buscadores de basura en los basureros municipales. Los niños que vivían en los alrededores de Lima también trabajaron haciendo ladrillos.

Los empleadores con frecuencia impusieron largas horas de trabajo a los niños a su cargo, obligándolos a realizar tareas difíciles y complicadas incluyendo la obligación de cocinar y cuidar a otros niños, pagándoles sueldos que podían ser tan bajos como \$20 a \$30 (69-103 soles) al mes.

En el 2001, el INEI estimó que un 80 por ciento de los niños que trabajaban continuaron asistiendo a la escuela. En el 2004, el Ministerio de Educación tomó medidas para que la educación fuese más accesible a los niños que se veían obligados a trabajar habiendo establecido un innovador programa de tutores, en este programa los maestros tenían la responsabilidad de supervisar a grupos de estudiantes y dedicar tiempo después de las clases a aquellos cuyo trabajo hacía difícil que pudieran asistir a clase de manera regular. El Ministerio también logró que las escuelas nocturnas estuviesen más disponibles para los niños trabajadores.

Aunque no hubo estadísticas confiables sobre su prevalencia, las ONGs y otros observadores sostuvieron que el país estaba experimentando un grave problema de prostitución entre adolescentes (ver la Sección 5), lo cual quedó demostrado con los allanamientos realizados por la Policía a burdeles clandestinos.

El Ministerio de Trabajo es la entidad responsable de hacer cumplir las leyes sobre el trabajo infantil y sus inspectores contaban con la autoridad legal para investigar los informes de prácticas ilegales de trabajo infantil. Los inspectores condujeron visitas rutinarias inopinadas a lugares donde se habían reportado problemas en el campo del trabajo infantil. Las compañías que son halladas culpables de violar las leyes sobre el trabajo infantil pueden ser objeto de multas y sus operaciones pueden ser suspendidas. Los inspectores realizaron más de 4.800 visitas durante el año e impusieron multas a 182 firmas por violaciones en las áreas de salud y seguridad.

Los inspectores mantuvieron contacto con una amplia gama de organizaciones no gubernamentales a nivel local, funcionarios de la Iglesia, funcionarios del Poder Judicial

y la Policía y funcionarios del sector Educación. El Ministerio de Trabajo informó que contaban con 263 inspectores laborales, un aumento de aproximadamente 30 por ciento comparado con el año anterior. Las inspecciones se centraron en el sector formal de la economía. La PNP y los fiscales a nivel local ejercieron su autoridad para hacer cumplir la ley.

Además de los inspectores de trabajo, las Defensorías para los Niños y Adolescentes (DEMUNAS) reciben denuncias sobre violaciones a las leyes que rigen el trabajo de los niños. Existieron más de mil DEMUNAS ubicadas en comunidades en todas partes del país. El MIMDES también continuó conduciendo el programa del "educador de la calle", que envió a maestros especializados a las calles para proporcionar educación y apoyo a menores dedicados a mendigar en las calles o a trabajar como limpiabotas.

En el mes de agosto del 2004, el gobierno creó el Comité Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil (CPETI) compuesto por representantes de varios Ministerios, ONGs, sindicatos y organizaciones de empleadores así como la OIT, la Organización Panamericana de la Salud y la UNICEF. Durante los meses de marzo y abril, este grupo sostuvo una extensa serie de consultas regionales sobre el borrador de su plan de 10 años para eliminar el trabajo infantil para niños menores de 14 y ofrecer una protección más amplia a los niños de entre 14 y 18 años de edad que se ven obligados a trabajar. En el mes de setiembre el gobierno adoptó el plan de manera oficial a través de la publicación de un decreto supremo. Adicionalmente, los miembros del CPETI llevaron a cabo varias campañas destinadas a elevar la toma de conciencia sobre el problema del trabajo infantil.

En el mes de junio la cabeza del MIMDES, Ana María Romero, declaró que el remoto pueblo de Santa Filomena era "la primera comunidad minera en la que no existía trabajo infantil". Como parte de un programa que funcionó del 2000 al 2005, Santa Filomena se convirtió en la localidad donde se llevó a cabo un experimento apoyado por el gobierno, la OIT y la ONG Cooperación a fin de crear una planta de procesamiento de oro mecanizada para reemplazar a los niños en la molienda del oro.

Los narcotraficantes violaron rutinariamente los derechos de los niños en su deseo de producir drogas ilegales. En el mes de agosto del 2004, la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Vida sin Drogas estimó que cinco mil niños estaban siendo empleados en la industria ilegal de estupefacientes, una actividad que expuso a estos niños a una variedad de sustancias químicas tóxicas que podrían tener efectos que van desde causar la muerte hasta ocasionar daños al sistema nervioso de una persona, ampollas o quemaduras.

e. Condiciones Aceptables de Trabajo

La Constitución señala que los trabajadores deben recibir un salario "justo y suficiente" a ser determinado por el gobierno mediante consultas con representantes de los trabajadores y el empresariado, así como contar una "protección adecuada contra el despido arbitrario". El salario mínimo legal fue de \$134 (460 nuevos soles) al mes, un sueldo que no permitió a un trabajador y su familia gozar de un nivel de vida decente. El gobierno estimó que la línea de pobreza se encontraba en aproximadamente \$65 (224

soles) al mes por persona para Lima, una cifra que varió dependiendo de la región. Una encuesta realizada por el INEI en el año 2003 fijó la línea de pobreza en \$75 (258 soles) al mes por persona para Lima, comparado con \$55 (189 soles) para la selva rural. Según algunos estimados, hasta una mitad de la masa de trabajadores percibió el salario mínimo o una suma menor, debido a que una porción muy grande de los trabajadores lo hizo en el sector informal en el que mayoritariamente no existen normas. El Ministerio de Trabajo tuvo la responsabilidad de hacer cumplir el pago del salario mínimo, el mismo que se hizo cumplir en el sector formal de la economía.

La Constitución dispone que la semana laboral debe ser una de 48 horas, con un día de descanso semanal. La ley exige que las compañías paguen sobretiempo a aquellos trabajadores que laboran por más de 8 horas al día y que proporcionen una compensación adicional por el trabajo nocturno. Los trabajadores, el empresariado y el gobierno informaron que la mayoría de compañías en el sector formal cumplió con la ley.

Aunque existen estándares de salud y seguridad ocupacional, el gobierno no contó con suficientes recursos como para permitirle supervisar a las compañías o hacer cumplir las normas. El Ministerio de Trabajo continuó recibiendo denuncias de parte los trabajadores e intervino en cientos de casos. En aquellos casos en los que se determinó que las firmas habían violado la ley, el gobierno normalmente las penalizó a través de la imposición de una multa. En el caso de los accidentes industriales, el monto de la compensación otorgada al empleado afectado usualmente fue determinado a través de un acuerdo alcanzado entre el empleador y el propio empleado. El trabajador no necesitó probar la culpabilidad de su empleador para poder obtener una compensación por algún daño sufrido al realizar su trabajo. No existe ninguna disposición en la ley que permita que los trabajadores puedan alejarse de situaciones de trabajo potencialmente peligrosas sin poner en peligro la continuidad de su empleo.